



**XXXI CONGRESO ALAS  
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

**ANÁLISIS PROSPECTIVO REFERENTE A LAS GARANTÍAS POLÍTICAS  
DE LOS DESMOVILIZADOS DE LA GUERRILLA, EN EL MARCO DEL  
POST-ACUERDO QUE SE DERIVA DE LAS CONVERSACIONES ENTRE  
GOBIERNO COLOMBIANO Y FARC-EP**

Nombre y apellido – Autora 1: Ginneth Esmeralda Narváez Jaimes

Correo electrónico: ginnethnarvaez@usantotomas.edu.co

Institución: Universidad Santo Tomás – Facultad de Sociología

País: Colombia

Nombre y apellido – Autora 2: Catalina Acosta

Correo electrónico: catalinaacosta@usantotomas.edu.co

Institución: Universidad Santo Tomás – Facultad de Sociología

País: Colombia

**RESUMEN:**

La presente ponencia evidencia las principales amenazas a las garantías políticas de los desmovilizados de las Farc-Ep<sup>1</sup>, a partir de un análisis interdisciplinar en el que confluyen distintas variables sociales, políticas, jurídicas y económicas, que dan cuenta de las vulnerabilidades que posee la implementación del acuerdo de paz logrado entre el gobierno colombiano y las Farc<sup>2</sup>. Hace parte de una investigación que está en curso como parte de un proyecto aprobado en la convocatoria FODEIN 2017, por la Unidad de Investigación de la Universidad Santo Tomás – Sede Bogotá (USTA).

**PALABRAS CLAVE:**

Colombia – Paz – FARC – Garantías Políticas

**ABSTRACT**

This paper demonstrates the main threats to the political guarantees Farc's leaders, from an interdisciplinary analysis in which different social, political, legal and economic variables converge, which account for the vulnerabilities that the implementation of the peace agreement reached between the Colombian government and the Farc. This paper is part of an investigation that is ongoing as part of a project FODEIN 2017, approved by the Research Unit of the Santo Tomás University in Bogotá (USTA).

**KEYWORDS**

Colombia - Peace - FARC - Political Guarantees

---

<sup>1</sup> Guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, Farc-Ep.

<sup>2</sup> Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc.

## **OBJETIVO GENERAL**

Realizar un análisis prospectivo que identifique el contexto social, político y económico que evidencie las vulnerabilidades que amenazan las garantías políticas de los desmovilizados de las FARC, en el marco del post-acuerdo.

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Determinar las principales vulnerabilidades jurídicas, políticas, económicas y sociales que amenazan la implementación del acuerdo de paz entre gobierno y FARC.
- Analizar las dinámicas del conflicto armado regional, teniendo en cuenta los principales retos de la implementación del acuerdo de paz con las Farc, en materia de seguridad.
- Analizar el alcance y las principales debilidades de la Reforma Política que se deriva del acuerdo de paz.
- Analizar el sistema electoral colombiano para dilucidar el alcance de la participación política de las Farc.

## **I. INTRODUCCIÓN**

En Colombia se reconocen tres guerrillas de primera generación, que son: 1) las FARC-EP que nacen en 1964, 2) el ELN que surge en 1965 y, 3) el EPL en 1967. Estas tres guerrillas se reconocieron por poseer una amplia base rural, tener la convicción de llevar la guerra revolucionaria del campo a la ciudad e introducir el marxismo como referente ideológico en su lucha por la toma del poder. (Narváez, 2014: 46)

Luego del acuerdo de paz con las FARC-EP, en Colombia perviven el ELN y el EPL como guerrillas con clara presencia territorial. Actualmente el ELN se encuentra en un cese al fuego indefinido, como producto de las conversaciones que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos en la ciudad de Quito, Ecuador.

En estas condiciones la guerrilla que pervive en disputa de control territorial y bajo apuestas de toma del poder y recambio del orden estructural en Colombia es el EPL, guerrilla que acoge la creación de focos insurreccionales en el campo (Villarraga, 1994: 30), pero a la final se orientó al modelo insurreccional de la guerra popular y prolongada, igual que las FARC-EP y el ELN (Narváez, 2014: 47).

**TABLA No. 1: GUERRILLAS DE PRIMERA GENERACIÓN EN COLOMBIA**

<b>Organización</b>	<b>ELN</b>	<b>EPL</b>	<b>FARC-EP</b>	<b>M-19</b>
<b>Características Principales</b>				
<b>Fundamentación Ideológica</b>	Guevarismo Camilismo Socialismo Latinoamericano	Marxismo Leninismo Maoísmo Socialismo	Marxismo Leninismo Socialismo Bolivarianismo	Socialismo a la colombiana Nacionalismo Bolivarianismo
<b>Estructura Político-Militar</b>	Estructura jerárquica y rígida, de mandos colectivos. Focos revolucionarios, OPM., células de guerrilla urbana y organizaciones de masas.  Lo militar subordina lo político	Estructura jerárquica y partidista. Combina: Partido, Ejército, Milicias y Organizaciones de Masas  Lo político subordina lo militar	Estructura jerárquica y partidista. Combina: Partido, Ejército, Milicias Urbanas y Organizaciones de Masas  Lo político subordina lo militar	Combinación de OPM, focos revolucionarios y células de guerrilla urbana  Lo militar subordina lo político

Fuente: Narváez, 2014: 48

De las guerrillas relacionadas en el cuadro anterior sólo se mantiene en combate contra la fuerza pública el EPL. Cabe anotar que el M-19 se desmovilizó a inicios de la década de los noventa, mientras que las FARC-EP lograron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en el año 2016, luego del Plebiscito que cambió el acuerdo inicial. Y el ELN mantiene conversaciones en la búsqueda de la paz.

En clave histórica, se debe tener presente que, referente al proceso de paz entre gobierno colombiano y FARC-EP existe un antes y un después del Plebiscito del 2 de octubre de 2016. Luego de socializados los puntos del acuerdo logrado en la Habana (Cuba), se pasó al proceso de legitimación por parte de la ciudadanía. Las campañas tanto por el SI, como por el No estuvieron ideologizadas.

En la campaña por el SI el respaldo institucional al proceso de paz fue evidente, mientras que en la campaña del NO, relucieron los discursos estigmatizadores, y el rechazo a los acuerdos por parte de una élite que prefiere la guerra antes que la paz. De ahí que en los resultados el triunfo lo lograra la apuesta militarista, triunfó del NO a la validación de los contenidos expuestos en el acuerdo. De ahí, que durante el mes de noviembre de 2016 el gobierno colombiano se viera forzado a ajustar los acuerdos y restringir libertades y derechos fundamentales que en principio estaban expuestos.

El triunfo que acompañó el recambio de los contenidos expuestos en el primer acuerdo también lo obtuvo el abstencionismo, reflejado en un 63% de la población que estaba habilitada para votar. Sólo para entrar en contexto es preciso ubicar el potencial electoral colombiano: 17.043.963 son mujeres y 15.751.999 son hombres.

De este alto potencial se obtuvo un 49.78% por el SI, con 6.377.482 votos, mientras que el triunfo por el NO se reflejó en un 51.21%, con 6.431.376 votos. Las elites políticas tradicionales y opositoras al acuerdo manipularon la opinión pública, bajo mentiras y engaños a propósito de la “ideología de género”, cuando en verdad impactaron el enfoque de género que estaba explicitado en marco del acuerdo, reconociendo derechos no solo para las mujeres, sino para las diferentes opciones sexuales.

El gobierno colombiano al ver derrotado el proceso de paz en las urnas, optó por la modificación y el ajuste consensuado con las Farc-Ep, y rechazó la posibilidad de una siguiente consulta, en clave de refrendación popular, sino que le otorgó al Congreso de la República dicha tarea. Entre los puntos sustantivos se ajustó el punto concerniente a víctimas, para lo cual las Farc-Ep deberían entregar toda la información concerniente a sus

bienes, por otra parte se ajustó el tiempo límite de lo que se denominó Justicia Especial para la Paz (JEP), que se configura como la estrategia jurídica para el procesamiento de casos denunciados, en marco de la lucha por la verdad y la reparación de las víctimas.

Con el fin de ilustrar al lector, se presenta a continuación un cuadro diagnóstico en el que se relacionarán los seis puntos sustantivos del acuerdo de paz, y sus principales vulnerabilidades detectadas a la fecha, se devela como se verá más adelante que el análisis de las garantías políticas no está restringido al punto concerniente sobre participación política, sino que está imbricado con los demás puntos propuestos, y requiere un análisis transversal en donde variables concernientes a desarrollo, libertades, seguridad y reformas estén directamente relacionados.

**TABLA No.2: DIAGNÓSTICO PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ ENTRE GOBIERNO Y FARC COLOMBIA 2017**

<b>PUNTOS</b>	<b>VULNERABILIDADES</b>
<b>Reforma Rural Integral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se han logrado avances sustantivos en innovación agropecuaria.</li> <li>• No existe aún catastro rural.</li> <li>• No se incluyó enfoque diferencial al tratamiento a pequeños cultivadores.</li> <li>• Está en riesgo, dado la relación con el proceso sustitución de cultivos.</li> </ul>
<b>Reforma política</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JEP: imposibilidad de participación e defensores de DDHH como magistrados, inestabilidad estatal, continúa obstrucción jurídica a la implementación de este mecanismo.</li> <li>• En riesgo las 16 circunscripciones especiales para la paz.</li> <li>• Altísimos niveles de corrupción a nivel, local, regional, nacional</li> <li>• Ley de garantías</li> <li>• Asesinato sistemático de líderes sociales y ex combatientes. A la fecha: 186 homicidios selectivos.</li> </ul>
<b>Sustitución de cultivos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento de los cultivos ilícitos de coca, marihuana y amapola (160.000 hectáreas)</li> <li>• Falta de reconocimiento a los planes productivos de las comunidades rurales.</li> <li>• Impacto socio-ambiental de Megaproyectos.</li> <li>• Choque entre planes productivos de comunidades y modelo de desarrollo hegemónico.</li> </ul>

<b>Fin del conflicto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zonas veredales transitorias con un 55% de abandono por parte de los excombatientes</li> <li>• Las Farc-Ep cumplieron con la entrega de armas, municiones y caletas.</li> <li>• Incomodidad ante la falta de adecuación de dichas zonas.</li> <li>• Mapa de asentamiento de actores armados, evidencia pugnans entre paramilitares, guerrilla y crimen organizado en las zonas de influjo histórico de las Farc-EP.</li> <li>• Disidencias de las Farc-Ep</li> </ul>
<b>Victimas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se presentó Ley de víctimas.</li> <li>• Nombres falsos, listas falsas.</li> <li>• Cuestionamiento a voluntad política de reparación.</li> <li>• JEP imposibilitada</li> <li>• Violación continua de DDHH y DIH</li> </ul>

Fuente: Elaboración propia

Respecto al balance del proceso es importante rescatar los aspectos positivos. Se desmovilizaron 14.000 excombatientes de las Farc, de los cuales 11.485 ya se encuentran acreditados. De ellos 9.843 están afiliados al sistema de salud, 3.500 inscritos en programas académicos y 3.840 afiliados a pensión.

En las zonas de transición se dio inicio a la implementación de 14 proyectos productivos, bajo el acompañamiento del Gobierno de Noruega. Se han creado 26 comisiones en las zonas de normalización para hacer seguimiento a los compromisos y alertar de cualquier dificultad.

En las zonas se concentraron madres en proceso de gestación y 133 de los menores de edad que fueron identificados, reciben actualmente el acompañamiento del Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar (ICBF) para la restitución de sus derechos.

## II. DESARROLLO

Aunque las negociaciones entre las Farc-Ep y el Gobierno arrancaron oficialmente en el año 2012, diversos factores sirvieron de ventana de oportunidad para que esta guerrilla se consolidara en el escenario público como actor político, con el cual se hacía posible y necesario establecer unos acuerdos mínimos en pro de su desmovilización y reinserción a la vida política legal.

En décadas anteriores, se habían intentado establecer acuerdos que permitieran terminar con las acciones bélicas por parte de esta guerrilla y lograr su desmovilización. Específicamente, durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) tuvo lugar el proceso de negociación en La Uribe-Meta (1984), en donde el mayor logro se dio con la aprobación de la ley de amnistía (1982) y el reconocimiento de las Farc-Ep como actor político (Narváez, 2017: 22), que fracasó por diferentes factores, entre ellos, la ausencia de un proyecto definido, en contraposición con un exceso de voluntarismo político; la constante violación de lo pactado; y como factor central, el exterminio de más de 3.000 militantes de la Unión Patriótica, fuerza política con la cual transitaría las Farc-Ep hacia una vida política legal (Romero, 2007).

El escenario para la negociación con Betancur se dio en condiciones que podrían considerarse desfavorables. Las Farc-Ep habían realizado la VII Conferencia en el año 1982, en la que evidenciaban la conjunción entre un carácter político y un carácter militar, proclamándose ahora como Ejército del Pueblo, que implicaba acciones político militares contundentes en la búsqueda de la toma del poder (Medina, 2009). Prueba de ello, sería la adopción de una estrategia cada vez más ofensiva contra las fuerzas oficiales. Este aspecto les permitió expandirse de forma diferenciada por las distintas regiones del país.

Sin embargo, el éxito en dicha estrategia requería de nuevas fuentes de financiación, de ahí que acogieran el secuestro y la extorsión a ganaderos y terratenientes, como mecanismo de consecución de recursos; lo que propició la consolidación de grupos paramilitares que más

allá de exterminar a las guerrillas, garantizarían el mantenimiento de la distribución desigual de la tierra y el poder local.

De acuerdo con el análisis de González (2014), en su afán por lograr una solución negociada del conflicto político con las Farc-Ep, el presidente Belisario Betancur, pese a su pertenencia al partido conservador, reconoció en dicho conflicto un carácter político que residía en razones objetivas y subjetivas, por lo que implicaba reformas sociales y políticas. Esta perspectiva que implicaba la afectación de múltiples intereses privados, generó descontento en diferentes sectores, incluidos las Fuerzas Armadas, gremios económicos, sectores de la Iglesia Católica, los partidos políticos tradicionales, etc.

Ligado a ello, la conformación de estructuras organizativas de corte político –vinculadas al Partido Comunista de Colombia (PCC)-, se hacían más débiles en cuanto debían surgir en paralelo con el crecimiento y expansión militar; de hecho para 1991 el PCC decidió desvincular su apuesta política de la lucha militar de las Farc-Ep. Así, la militancia se hacía frágil ideológicamente, limitándose a vinculaciones más de carácter táctico que político, mientras que militarmente se acumulaban réditos y evidentes dominios territoriales y al tiempo control social de la población. Este aspecto generó dificultades para ganar la simpatía de la población, en tanto la falta de preparación política redundaba en una aplicación desmedida de la fuerza como forma de coacción.

Semejante desencuentro entre la propuesta de paz de Betancur y la realidad política se presentaba especialmente en regiones de colonización donde el avance electoral de la Unión Patriótica amenazaba los poderes locales y regionales, la extorsión y los secuestros de la guerrilla golpeaban a los grupos económicamente poderosos y los avances militares de la guerrilla se habían constituido en obstáculo formidable para el desarrollo regional y su integración al mercado nacional e internacional y a la sociedad mayor. (González, 2014: 388).

Las Farc-Ep en sus distintos acercamientos al gobierno nacional no llegaron al escenario de la negociación en una posición derrotada militarmente; sin embargo, de manera progresiva fueron llegando más debilitadas políticamente, en tanto su base social se menguaba y se debilitaba cada vez más. Mientras su estrategia de guerra ofensiva y expansiva tuvo lugar de manera exitosa durante la década de los noventa, el trabajo político tanto interno como

externo se vio truncado por la priorización de combates y por una apuesta que privilegió la vía militar.

Frente a los requerimientos económicos para mantener la máquina de guerra que habían forjado las Farc-Ep, se acumuló un continuo y cada vez más extendido rechazo de esta organización insurgente como actor político, tanto el discurso político de las élites, como el mediático, polarizó cada vez más la sociedad civil y construyeron esta guerrilla como *enemigo* y *amenaza* por parte de sectores con influencia en la distribución de poder, sobre todo regional, brindando además una “justificación” a la consolidación del paramilitarismo.

Este escenario en vez de proporcionar una oportunidad para la solución a la violencia política derivada del conflicto entre Farc-Ep y Gobierno, posibilitó la emergencia de los paramilitares que se expandieron por diferentes zonas, en la búsqueda de obtener presencia nacional, y se configuraron como actor decisivo en los fracasos de los diferentes esfuerzos que en adelante tendrían lugar para negociar el conflicto armado entre guerrillas y gobierno (González, 2014; Romero, 2003).

Entre otras cosas, porque sumado al narcotráfico y la delincuencia común organizada, se impedía la comprensión de la guerrilla como opción de poder político p, real, la opinión pública negó de manera progresiva su carácter político y sólo sus bases sociales de influencia histórica mantuvieron simpatías y consonancias con el programa político de las Farc-Ep, impidiendo capitalizar las tensiones nacionales para legitimarse y concentrar el conflicto en una diada Estado/guerrilla (Pizarro, en Leal Buitrago y Zamosc, 1999).

Durante la década siguiente, este escenario se fortaleció con la formulación de la Nueva Constitución Política, fruto de la Asamblea Nacional Constituyente y las desmovilizaciones de las guerrillas de segunda generación y de facciones del ELN y el EPL<sup>3</sup>, así el país vislumbraba un escenario de participación política más democrática y con claras garantías

---

<sup>3</sup> En 1990 se desmovilizaron cuatro organizaciones que hacían parte de la CGSB, entre ellas estaba el M-19, el PRT, el Quintín Lame y una facción del EPL; mientras que las FARC-EP, la UC-ELN, así como la facción que permaneció alzada en armas del EPL. (Narváez, 2017: 21)

para la oposición, sin embargo el contexto no fue el ideal. La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), integrada por las Farc-Ep, el ELN y el EPL, no lograron acuerdo con el gobierno de César Gaviria, a pesar de haber tenido tres intentos consecutivos (Cravo Norte, Caracas y Tlaxcala), en consecuencia se desata la política de Guerra Integral contra los grupos insurgentes que no participaron de la desmovilización de 1990 y la concepción de derrotarlos por vía de la fuerza (Narváez, 2014).

Al tiempo las Farc-Ep decidieron elevar progresivamente su poder militar, producto de la capacidad de financiamiento encontrada en nuevas fuentes de recursos económicos, por cuenta de su integración a la totalidad del proceso del negocio de la coca, uno de los principales agentes en la prolongación del conflicto armado en adelante. Por el contrario, la búsqueda de apoyo social y/o dominio territorial por cuenta de la influencia en la población perdió importancia (Echandía, 2004). A estas transformaciones en la orientación de los intereses de la guerrilla en cuestión, le llama Pécaut, la fase de “desterritorialización” de la guerra, en tanto,

La lucha es por el poder político y militar, lo que no implica prioritariamente una apropiación de territorios sino más bien, la capacidad de asegurar posiciones clave para cambiar los equilibrios de fuerza y obligar al adversario a ceder terreno político, dentro de una visión de la autonomía creciente de los actores armados en relación con la población y todo ello en función de metas estratégicas. (Pécaut, en Montañez, 2004: 24).

El ambiente estaba impregnado por la posibilidad de abrir espacios a nuevas opciones políticas que se oponían al orden dictado por los partidos tradicionales, pese a los asesinatos de los principales líderes políticos<sup>4</sup> que se proyectaban como verdaderas opciones en la disputa por el poder en las urnas, en tanto amenazaban con sus agendas políticas los intereses políticos y económicos de las élites. No obstante, nuevamente las negociaciones partían de una lectura desajustada de la realidad de las Farc-Ep -y el ELN, con quien también se abría la puerta a la negociación-. De otro lado, los sectores

---

<sup>4</sup> En marco de las elecciones presidenciales de 1990 se asesinaron dos candidatos líderes de oposición y un candidato liberal comprometido con la lucha contra el narcotráfico: Bernardo Jaramillo Ossa (UP), Carlos Pizarro (AD-M19) y Luis Carlos Galán (Partido Liberal).

económicos tampoco querían participar y ceder a reformas sociales y económicas estructurales, que inevitablemente afectarían sus intereses lucrativos.

Adicionalmente, la posición de ambas partes se fue endureciendo progresivamente. Por el lado del gobierno, la Constitución de 1991, deslegitimaba la lucha armada<sup>5</sup> y el accionar vinculado a la misma. Del lado de la guerrilla, el ataque del Ejército al Estado Mayor de las Farc- Ep en “Casa Verde”, resultó en una contraofensiva. Además, de acuerdo con (González, 2014: 416), su posición frente a la posibilidad de una tregua se rechazaba de forma radical, dado que en ambos casos se consideraba “la vía militar como una estrategia de disuasión frente a su contendiente, y a la contraparte como carente de voluntad política para negociar”. Finalmente, las negociaciones fracasaron y este resultado fue utilizado estratégicamente para la deslegitimación de la guerrilla como interlocutor válido, retornando a estrategias de extinción por vía militar.

Del lado de las Farc-Ep, también hubo consecuencias. Durante su VIII Conferencia en 1993, se redefinieron los objetivos militares y políticos de la organización, pasando de incidir solo en sus zonas santuario a las áreas urbanas más integradas, del paso de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones (Medina, 2009). De forma paralela, los grupos paramilitares se expandieron de forma acelerada, lograron tener más de 60 frentes a nivel nacional. Así, durante la segunda mitad de los años noventa, el país asistiría a uno de los periodos más sangrientos de su historia por cuenta de las interacciones estratégicas entre autodefensas y grupos guerrilleros, caracterizadas por el desarrollo de unos repertorios de acción producto de dicha interacción, que incrementaron los niveles de violencia de forma exponencial, además que pese a sus planteamientos políticos, sus medios no fueron consonantes a dichos propósitos y perdieron simpatía entre la mayoría de la población (González, Bolívar y Vásquez, 2003: 72).

---

<sup>5</sup> La Asamblea Constituyente había reconocido como voceros a los líderes políticos de las guerrillas recién desmovilizadas, de ahí que las guerrillas que no lograron negociar se comprendieron a partir de la lógica de sangre y fuego, en donde el objetivo gubernamental que primaba sería su reducción por la vía de la fuerza, sin reconocimiento como actores políticos.

En este contexto de confrontación, entre 1998 – 2002, en marco del Gobierno de Andrés Pastrana Borrero se abrió la posibilidad de iniciar un “proceso de paz” con las Farc-Ep en San Vicente del Caguán – Caquetá, desde el inicio el proceso de paz fue utilizado como propaganda de campaña en la que se comprometía la concreción de la paz, a partir de la voluntad política tanto institucional como insurgente. Durante ese período el conflicto se intensificó por iniciativa de la Fuerza Pública que llevó a cabo diversas acciones militares de ofensiva contra las Farc-Ep (Echandía, 2004), mientras que esta guerrilla en su apuesta por la guerra de posiciones enfocaron su acción militar en la destrucción de puestos de policía, sabotajes a la infraestructura, ataques y presiones a la población civil, lo que originó profundos rechazos a su actividad.

Bajo la administración de Andrés Pastrana cabe resaltar el fortalecimiento político-militar que habían adquirido las FARC-EP, su recomposición política se observó con el lanzamiento del Movimiento Bolivariano como estructura de base ampliada y la constitución del PC3, Partido Comunista Clandestino de Colombia, como vanguardia ideológica de la organización. El fortalecimiento militar que tuvieron las FARC-EP dentro de este periodo, estuvo expresado en control territorial, incremento de hombres/arma y crecimiento de la estructura clandestina a nivel nacional (Narváez, 2017: 21)

En esta ocasión, los factores que influenciaron la ruptura del proceso fueron la falta de claridad en la propuesta, de reglas de juego y de intermediarios; la concesión deliberada de una zona de distensión que se convirtió en requisito principal para una de las partes; fortalecimiento militar de la guerrilla; injerencia por parte de los medios de comunicación; y violación de lo pactado por cuenta del secuestro del senador Luis Eduardo Gechem en 2002.

Cabe destacar que este proceso de paz se realizó en medio de la guerra, no hubo cese al fuego, ni cese de hostilidades para ponerlo en marcha. De esta manera apelar a acciones militares de uno u otro lado para comprender los impases que sufrió el proceso pierde su peso argumentativo, aún más sí se reconoce que durante todo el desarrollo del proceso se mantuvieron acciones armadas, combates, hostigamientos, secuestros y operativos en diferentes regiones del país (Narváez, 2017: 83)

El proceso fallido<sup>6</sup> de desmovilización, desarme y reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se constituye como

---

<sup>6</sup> Se considera fallido dada la consecuencia directa que contrajo su reorganización en Bandas Criminales (BACRIM), que mantienen prácticas consonantes a los objetivos históricos de las AUC, siguen actuando

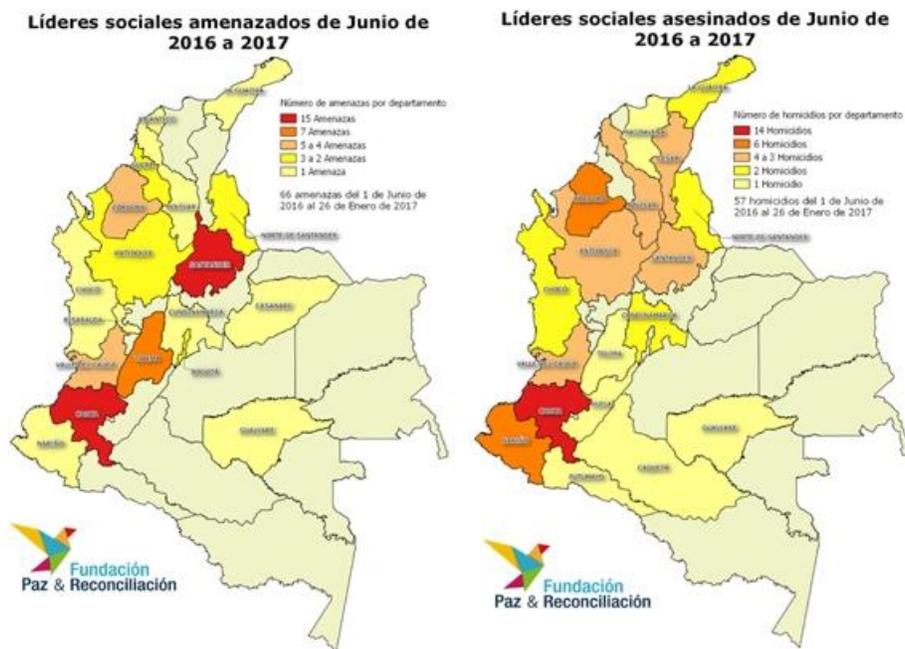
experiencia valiosa para la previsión y advertencia frente a posibles obstáculos y debilidades que se puedan presentar al actual proceso de reinserción con las Farc-Ep. Las estructuras político-militares de las AUC volvieron a recomponerse bajo la figura de Bandas Criminales (BACRIM), y mantienen estrategias y tácticas militares que le dan continuidad a la apuesta de copamiento territorial que desarrollaron las AUC.

Otro aspecto que permite comprender las BACRIM como línea de continuación de la lucha paramilitar tiene que ver con su acción de exterminio contra los líderes sociales y políticos de oposición, para dar un dato, desde la firma del acuerdo de paz entre Gobierno y Farc-Ep a la fecha han sido asesinados 183 líderes campesinos, indígenas y ambientalistas.

A continuación se presenta el mapa de impacto nacional de asesinatos de líderes sociales, en donde se mantiene como constante la vulnerabilidad de las periferias rurales, en donde el Estado sólo mantiene una presencia militar, evidenciando una profunda debilidad institucional que deriva en mayor inequidad y en falta de reconocimiento de las realidades locales y de las demandas sectoriales particulares de la población rural.

---

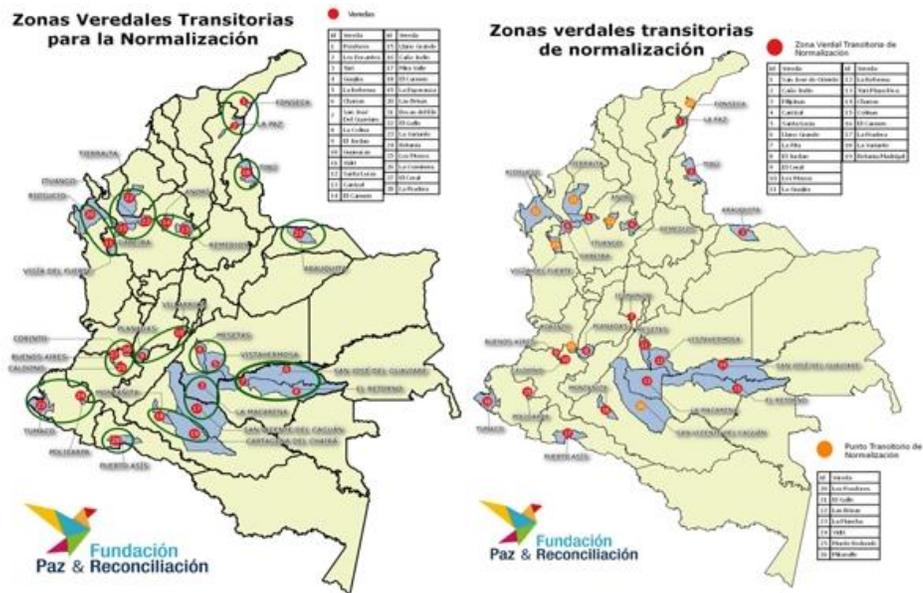
como autodefensas regionales, controlando los mercados y rutas del narcotráfico, al tiempo que mantienen acciones de guerra sucia, perpetrando asesinatos sistemáticos contra los líderes sociales en Colombia; mientras que en las zonas rurales y en las zonas urbanas periféricas mantienen lógicas de amenaza y persecución como tácticas de control social y territorial.



Fuente: Fundación Paz y Reconciliación 2017

El proceso de paz que desarrolló el gobierno de Juan Manuel Santos posee grandes diferencias con las mesas de conversación previas adelantadas por los gobiernos de Betancur, Gaviria y Pastrana, dado que en este caso el fruto del proceso se logró porque ambas partes lograron estructurar una agenda sustantiva, más que procedimental y se firmó con la promesa de concretar reformas políticas y sociales que condujeran al reconocimiento del campesinado como fuerza política, al respeto por los DDHH y a la consolidación para el ejercicio de la oposición.

Por esta razón las Farc-Ep accedieron a la entrega de su armamento, a la desmovilización de sus combatientes y a la clarificación de sus bienes. Las Farc-Ep también se comprometieron a la búsqueda del esclarecimiento de los hechos que posibilitara una reparación a las víctimas que contrajo la confrontación bélica, bajo presupuestos del modelo de justicia alternativa denominado Justicia Especial para la Paz. Luego de la firma, las Farc-Ep se concentraron en 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) que se señalan a continuación:



Fuente: Fundación Paz y Reconciliación 2017

Sin embargo, a la fecha son evidentes los principales factores de incumplimiento:

- Problema en la Reintegración: El gobierno colombiano tuvo serios problemas logísticos en cuanto a la provisión de alimentos, servicios básicos y vestimenta civil para la población excombatiente.
- Aún se mantiene un desinterés en la regularización de la propiedad de la tierra rural, de ahí que el país no cuente con un catastro rural multipropósito
- Se mantiene un debate álgido acerca de la sustitución de cultivos: Los cultivadores plantean la necesidad de una sustitución concertada y progresiva, mientras que el gobierno nacional propone una erradicación inmediata, que de no lograrse se realizará por la vía represiva, tal como ya ocurrió en Tumaco en Octubre del 2017, en donde murieron 7 campesinos y se imputó a la Fuerza Pública como responsable del hecho.
- El crimen organizado se mantiene en un aumento constante, relacionado directamente con el incremento de los cultivos ilícitos, consolidando a su vez el negocio del microtráfico en las diferentes ciudades colombianas.
- En este momento Naciones Unidas ha logrado constatar que en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización se ubica un 55% de abandono por parte de los excombatientes de las Farc-Ep

- Es clara la consolidación de las disidencias FARC (Columna Móvil Daniel Aldana, Frente 1), impactará a futuro en el origen de nuevos grupos insurgentes o en el incremento de los disidentes que logre cooptar el narcotráfico, expresado en la consolidación del Clan del Golfo.
- Este panorama genera profundas disputas territoriales que derivaran en una agudización del conflicto social y nuevos enfrentamientos bélicos entre Grupos Armados Organizados (GAO): Nuevo Orden, Urabeños, Clan del Golfo, AGC
- Se presenta una constante reconfiguración de actores armados ilegales en todo el país.
- Se mantiene la persecución y el asesinato de líderes sociales y reinsertados, lo cual impacta de manera directa sobre la falta de garantías políticas para el ejercicio de la oposición en Colombia.
- Se falló la exclusión de los civiles de la obligación de comparecer ante el Tribunal de Paz, como terceros corresponsables en las violaciones de Derechos Humanos en marco del conflicto armado con las Farc-Ep, de ahí que los reales intereses políticos y económicos que han posibilitado la guerra en Colombia NO se juzguen y se mantenga la impunidad como norma.

### **III. CONCLUSIONES**

Con este panorama político-militar se evidencia una clara necesidad de protección de derechos humanos (Políticos, Sociales y Económicos), no sólo de los excombatientes, sino también de los líderes de oposición en Colombia. Se requiere reconocer e impulsar a modelos de desarrollo alternativo en las regiones y darle solución al problema de la tierra, que sigue siendo la causa fundamental del conflicto social, político y armado en el país. Al tiempo evitar al máximo la sustitución de cultivos ilícitos por vía de la fuerza y propiciar espacios de encuentro y concertación entre gobierno y comunidad.

Referente a las garantías políticas, se requiere una reforma política que sea fruto de la organización social, en la búsqueda de garantías electorales que logren combatir la corrupción y el clientelismo, de la mano se requieren urgentes garantías para las víctimas,

por cuanto el Congreso limitó la responsabilidad de terceros (políticos y empresarios), en marco de la Justicia Especial para la Paz, que fue aprobada en el fast-track.

Para cerrar se requiere un replanteamiento de la política de seguridad y defensa, que comprenda el diagnóstico de las nuevas amenazas, acciones conducentes a la resolución de la conflictividad social y la lucha contra las violencias emergentes.

Desde la variable económica es necesario realizar diferentes tipos de inversión social en la zonas (ZVT- Circunscripciones especiales para la Paz) y al tiempo reconocer los planes de vida de comunidades afro e indígenas, así como de los modelos alternativos de desarrollo que están impulsando comunidades rurales, que históricamente se han opuesto al modelo de desarrollo hegemónico, dado los impactos sociales y ambientales que están constatando en sus territorios.

En esta vía, se reconoce la paz como un ejercicio de gobierno pluri-sectorial, en el que convergen distintas variables que pueden posibilitar su consolidación. De otra manera, es obtuso concebir la desmovilización de las Farc-Ep, como el único factor que determinaría a futuro la ausencia de los conflictos sociales y la violencia en Colombia, se debe entonces reconocer la paz con las Farc como un proceso social, en el que se requieren priorizar acciones desde el ámbito económico, social y cultural; al tiempo que deben articularse las decisiones políticas, con los acuerdos que se logren con las comunidades locales en materia de desarrollo económico regional.

## BIBLIOGRAFÍA

- Constitución Política República de Colombia (1991)
- CEPAL (2006) Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe. Santiago De Chile: CEPAL
- CIDH, OEA. (1999). “Capítulo IX, La Libertad de Asociación y los Derechos Políticos, E. Partidos Políticos Alternativos, párrafo 51.” En: *Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia*.
- Echandía, Camilo. (2004). Evolución reciente de la geografía del conflicto armado, en *Dimensiones territoriales de la guerra y la paz*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- González, Fernán E. (2014). Poder y violencia en Colombia. Bogotá: Odecofi-Cinep
- González, Fernán e Ingrid J. Bolívar y Teófilo Vázquez. (2003). Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado. Bogotá: Cinep.
- Leal Buitrago, Francisco y Zamosc, León. (Ed) (1990). Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80. Bogotá: Tercer Mundo Editores y Universidad Nacional de Colombia- Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.
- Medina Gallego Carlos (2009), *FARC-EP. Notas para una historia política, 1958-2008*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
- Melo, Jorge Orlando (1991). *Los Paramilitares y su impacto sobre la política*. En: Al Filo del Caos. Crisis Política en la Colombia de los años 80. Bogotá: Tercer Mundo Editores, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI.
- Narváez Jaimes, Ginneth Esmeralda (2014) Análisis de los Procesos de Paz en Colombia en los inicios de la década de los noventa. Lecciones de El Salvador. Bogotá: Revista Criterios Vol. 7 No 2
- Narváez Jaimes, Ginneth Esmeralda (2017) Análisis de la Ruptura del Proceso de Negociación entre las Farc-Ep y el Gobierno Colombiano (1999-2002). Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, con Énfasis en Estudios Políticos. Quito: FLACSO- Ecuador
- Romero, Mauricio. (2003). Paramilitares y autodefensas, 1982-2003. Bogotá.
- Romero, Mauricio (2007). *Nuevas Guerras, paramilitares e ilegalidad: Una trampa difícil de superar*. En: Parapolítica La Ruta de la Expansión Paramilitar y los Acuerdos Políticos. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris, Editorial Intermedio.
- Montañez, Gustavo. (2004). Dimensiones territoriales de la Guerra y la Paz. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Leal Buitrago y Zamosc, 1999
- Villarraga Sarmiento, Álvaro (2008). Procesos de Paz: Gobiernos Nacionales y Movimientos Insurgentes M-19, EPL, PRT y MAQL. En: *Sentidos y sinsentidos de la Paz*. Bogotá: Instituto para la paz, la pedagogía y el conflicto urbano. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

## **PORTALES WEB:**

### **Fundación Paz y Reconciliación:**

<http://www.pares.com.co/categoria/documentos-e-informes/>

### **El Espectador:**

<https://www.elespectador.com/noticias>

### **Revista Semana**

<http://www.semana.com/>

### **Verdad Abierta**

<http://www.verdadabierta.com/>